



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Oscar de la Cruz Correa Flórez
DEMANDADOS	Colpensiones Guillermo León Montoya Montoya
RADICADO	05-001-31-05-006-2019-00048
TEMA	Relación laboral, pensión de vejez
DECISIÓN	Confirma sentencia

El dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **216** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **OSCAR DE LA CRUZ CORREA FLÓREZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-** y el señor **GUILLERMO LEÓN MONTOYA MONTOYA**, con radicado 05-001-31-05-006-2019-00048.

• **PRETENSIONES:**

Aspiran el demandante se declare que Colpensiones debe reconocer en su favor el faltante de las 500 semanas no pagadas por el empleador Guillermo León Montoya Montoya al sistema general de pensiones. Como consecuencia, se le reconozca la pensión de vejez atendiendo al régimen de transición a partir del 28 de abril de 1993, intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 o en subsidio indexación.

• **HECHOS**

El demandante sustentó las anteriores pretensiones en los hechos siguientes: que cuenta con 84 años de edad. Que es beneficiario del régimen de transición. Para julio de 1995 contaba con 750 semanas de cotización. Que laboró al servicio de la Contraloría Departamental en Ejecuciones Fiscales de

la Tesorería entre los años 1971 a 1973, en el municipio de Medellín de junio de 1973 a diciembre de 1976, alcalde municipal de septiembre de 1976 a febrero de 1985. Que cotizó al ISS, hoy Colpensiones desde septiembre de 1994 hasta agosto de 2000. Que fue empleado del Departamento de Antioquia en diferentes cargos entre 1971 a 1985 y en la Secretaría de Gobierno Departamental de 1978 a 1988. Que laboró para el señor Guillermo León Montoya Montoya desde febrero de 1985 hasta agosto de 1994, pero que estos periodos no aparecen reportados en el sistema general de pensiones. Que en agosto de 2009 solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión, misma que fue negada por no cumplir con la densidad mínima de semanas. Que elevó varias solicitudes de pensión de vejez e indemnización sustitutiva. Que presento demanda judicial solicitando el reconocimiento de la pensión familiar, la cual fue negada.

- **CONTESTACIONES:**

Colpensiones: Se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones al señalar que el afiliado no causó el derecho a la pensión de vejez, por no acreditar la densidad mínima de semanas y que el supuesto empleador nunca lo afilió. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: cosa juzgada, inexistencia de obligación de reconocer la pensión de vejez, inexistencia de la obligación de pagar retroactivo pensional, inexistencia de obligación de reconocer intereses moratorios, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, improcedencia de la indexación de las condenas, la genérica y cobro de lo no debido.

Guillermo León Montoya Montoya: a través de curadora ad-litem, manifestó que no le constan los hechos de la demanda. Indicó que “a la totalidad de las pretensiones me atengo a los hechos y documentos probado dentro del proceso con los medios legales de prueba oportunamente controvertidos y arrimados al mismo”. Como excepciones de mérito propuso: genérica, prescripción e inexistencia de la obligación,

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 2 de diciembre de 2021 el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín absolvió a las demandadas de la totalidad de las pretensiones. Condenó en costas procesales de manera solidaria al demandante y a su mandatario judicial. Asimismo, frente a este último, impuso multa por valor de \$9.085.260

en favor de la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por el demandante, quien a través de su mandatario judicial la sustentó en los siguientes términos: **(i)** en relación a lo indicado por la juez que no se encuentra probado que el demandante trabajó para el señor Montoya Montoya, indicó que la misma juez en audiencia negó los testimonios de los señores Iván José Bustamante, Nelson Ciro González y Orlando de Jesús Ossa, los cuales estaban presentes al momento de la audiencia, negativa que va en contravía de lo señalado por el decreto 806 de 2020, pues la juez indicó que no se aportó la dirección para localizarlos, desconociendo que estos se encontraban presentes, al lado del demandante, para el instante en que se desarrolló la audiencia. Que tal negativa por la juez es arbitraria. Que la juez no repuso la decisión. Que la juez se puso al lado de los intereses de Colpensiones, pues esta entidad tiene la obligación del cobro coactivo y de perseguir a los empleadores que debieron reportar las cotizaciones, negando como consecuencia la pensión de vejez a una persona de avanzada edad y que tiene un derecho que ha venido peleando ante la administración; **(ii)** Que en relación a la temeridad aludida por la juez al mandatario judicial, señala que el Juzgado 19 indicó que se debían buscar más semanas para acreditar el derecho, por lo que considera que no hay temeridad, pues en realidad solo buscó defender la causa. Solicitó que, con fundamento en el artículo 83, se pida la declaración de los testigos para complementar la realidad de la relación laboral, pues se le violó el debido proceso por parte de la juez; **(iii)** En relación con la multa que le impuso la juez por temeridad, esta no tiene coherencia ni presentación. Asimismo, frente a las costas procesales, indicó que la juez en los procesos de pensiones condena a \$400.000, pero que en el presente asunto triplicó esa suma frente a una persona que le afectará su mínimo vital y contra el mandatario judicial que no ha recibido un peso por concepto de honorarios. Considera que con tal decisión se están violando todos los principios, además de demostrarse una parcialización y una extralimitación en sus funciones, advirtiendo con ella una conducta dolosa; **(iv)** Solicita como consecuencia se revise concienzudamente por el Tribunal y se aplique el decreto de prueba

- **ALEGATOS:**

Fueron presentado por las partes, así:

Demandante: Hizo alusión a los hechos de la demanda. Añadió que “El juzgado Sexto laboral del circuito de Medellín incurre en los siguientes errores procesales vulnerando el derecho de defensa y de contradicción del demandante a saber. El artículo 28 del CPTSS establece que antes de admitir la demanda, el juez como director del proceso devolverá la demanda al accionante para que subsane dentro del término de 5 días las deficiencias de los requisitos conforme al artículo 25 del CPTSS, el juzgado sexto laboral de Medellín omitió la subsanación del requisito incumpliendo su deber procesal de saneamiento y debido proceso. El juzgado sexto laboral del circuito de Medellín nombro curador ad litem para representar al empleador demandado Montoya Montoya, el 9 de diciembre de 2019 cargo que fue aceptado por la profesional del derecho Sol María Angulo Gómez, la cual contestó la demanda el 24 de enero de 2020, sin proponer excepciones a la demanda ni hacer ninguna alusión al tema de los testigos de la parte demandante. El 14 de octubre de 2020 se notificó a la entidad Colpensiones y este contestó la demanda en febrero de 2021, proponiendo como única excepción la cosa juzgada procesal, sin hacer ninguna mención en el tema de los testigos solicitados en la demanda. En el expediente del proceso ordinario laboral de la referencia ante el juzgado sexto laboral del circuito de Medellín obra declaración juramentada de los 3 testigos ante notario del círculo de Medellín donde se identificaron plenamente. Cabe anotar que conforme a la grabación de la audiencia del artículo 77 del CPTS realizada en el juzgado sexto laboral del circuito de Medellín, se aprecia que los testigos solicitados en la demanda los señores IVAN JOSE BUSTAMANTE SIERRA identificado con la cc 8242656, NELSON CIRO GONZALEZ identificado con la cc 71140793, y ORLANDO DE JESUS OSSA CHAVARRIAGA, identificados con la cc 70044453, estuvieron presentes en la audiencia para rendir testimonio así se le manifestó a la señora juez sexta laboral por este libelista y por mi poderdante informándole previamente que estos no tenían correo electrónico y que nos encargaríamos de hacerlos comparecer al despacho en la fecha y hora que el juzgado fijara para ello, sin embargo la juez sexta laboral se negó en forma caprichosa a tomarles juramentos y a aceptarlos como prueba importante de los hechos y pretensiones, a sabiendas que los tres señores fueron trabajadores del señor Montoya Montoya conociendo al señor Correa Flores como trabajador de Montoya Montoya, siendo la única manera de demostrar el vínculo y los externos laborales de la relación laboral de mi poderdante Correa Flórez con el señor Montoya al no haber más documentos físicos que pudieran acreditar el vínculo laboral. El juzgado sexto laboral del circuito de Medellín fija la fecha de la audiencia del artículo 80 del CPTSS para el día 2 de diciembre de 2021 donde declaro infundada la excepción de cosa juzgada interpuesta por Colpensiones y absolvió a Colpensiones y al señor Montoya Montoya de las pretensiones de la demanda al señor Flórez Correa y lo condeno en costas, y concedió el recurso de apelación interpuesto por este libelista para conociendo del tribunal superior de Medellín sala laboral (...) La señora juez Sexta laboral del circuito de Medellín, a pesar de que en la sentencia emitida de primera instancia declara infundada la excepción de cosa juzgada interpuesta por Colpensiones frente a demanda anterior interpuesta por mi poderdante, frente a hechos diferentes de la presente demanda, en forma temeraria e ilegal impone costas a mi poderdante y a su apoderado y multa a este libelista por supuesta “temeridad” lo que denota la total animadversión y parcialidad de la señora juez sexta laboral en contra de este libelista, el cual siempre ha actuado como abogado en derecho, en forma ética y en justicia haciendo una defensa técnica y profesional a mi poderdante, que a sus 89 años de edad está protegido constitucionalmente sin embargo, no ha podido disfrutar de su merecida pensión de vejez por la negligencia de sus empleadores que no reportaron las semanas cotizadas y descontadas de nómina al señor Correa Flores, afectando su récord pensional, lo que le ha impedido tener

el disfrute de su merecida pensión vejez. Con base a lo anteriormente expuesto, Solicito muy respetuosamente al despacho en recurso de apelación, revocar en su totalidad la sentencia emitida por el juzgado sexto laboral del circuito de Medellín en primera instancia ordenando el reconocimiento y pago de la totalidad de las pretensiones de la demanda de la referencia y la condena en costas a cargo de la entidad demandada en favor de mi poderdante”

Colpensiones: Solicita la confirmación de la sentencia absolutoria. Que en dos procesos judiciales se resolvió acerca de la pretensión pensional solicitada por el demandante, resultando ellas absolutorias, por lo que considera que hay cosa juzgada. Añadió que *“Revisada nuevamente la historia laboral, fue posible determinar que actualmente el accionante cuenta con 84 años de edad y 622.71 semanas, teniendo en cuenta los periodos certificados a través de los formatos CLEBP N°8345 y N°584, emitidos por el Municipio de Medellín. Por lo anterior, se concluye que igualmente no es procedente un reconocimiento prestacional, según lo establecido en la norma en comento, pues no acredita la densidad de semanas mínimas exigidas, deviniendo improcedente el reconocimiento de la pensión”*

C O N S I D E R A C I O N E S:

Atendiendo a la apelación formulada por el demandante, el problema jurídico para resolver por esta Sala del Tribunal se circunscribe en determinar si se encuentra probada la relación laboral con el señor Guillermo León Montoya Montoya y como consecuencia se acreditó la densidad mínima de semanas laboradas para causar el derecho a la pensión de vejez bajo el régimen de transición.

i) Relación laboral

Afirma el demandante que laboró al servicio del señor Guillermo León Montoya Montoya desde febrero de 1985 hasta agosto de 1994, pero que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, no realizó en contra de este las acciones de cobro por los períodos no cotizados.

Frente a la omisión de la afiliación, se debe recordar que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando el tema de debate tiene que ver con la falta de afiliación al sistema de pensiones las normas llamadas a regir son las vigentes al momento en que se causa la prestación reclamada, esto a diferencia de los procedimientos para el cobro de aportes en mora que atendiendo a su naturaleza deben ser las vigentes para el tiempo de la omisión. El aludido precedente se encuentra en las sentencias SL464-2013, SL16715-2014 y SL14388-2016.

Lo anterior quiere decir que en aquellos casos en que no se presenta afiliación por omisión pura y simple del empleador, la solución ofrecida por la jurisprudencia ha sido la de aplicar de forma retrospectiva las normas, así en sentencia SL14388 de 2015, se concluyó:

“...ante situaciones de omisión de la afiliación del trabajador al sistema de pensiones, a pesar de la vigencia clara de una relación laboral, como en el caso que hoy se analiza, la Corte ha precisado la orientación que tenía, encaminada a trasladarle la responsabilidad al empleador, para dar cabida también al reconocimiento de las prestaciones por las respectivas entidades de seguridad social, con el consecuente recobro e integración de las cotizaciones y recursos, a través de cálculos actuariales.

En la sentencia CSJ SL16715-2014, la Corte precisó la orientación vertida en la sentencia CSJ SL646-2013, bajo el entendido de que, ante realidades como la expedición del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la respuesta más acoplada al sistema de seguridad social, ante omisiones en la afiliación, es el cubrimiento de las prestaciones por el sistema de pensiones, con el recobro de los recursos a los empleadores, a través de un cálculo actuarial.”

Asimismo, en sentencia SL2112-2021 la Corte expuso algo similar, esto es:

“A lo dicho se añade que no podía concebirse una solución distinta, si se repara en los principios de la seguridad social, tales como la universalidad, unidad, eficiencia e integralidad, que propenden porque ante la falta de afiliación, sin importar cuál sea la razón, la solución consista en que las entidades de seguridad social tengan en cuenta el tiempo servido, como tiempo efectivamente cotizado, con la obligación consecuente del empleador de pagar el título pensional o cálculo actuarial que corresponda, por los tiempos omitidos.

Eso se dijo en pronunciamientos recientes (CSJ SL1358-2018 y CSJ SL2791-2020) que reiteran lo ya explicado por la Corte, así:

“Con todo, la Corte ya ha determinado que en desarrollo de reglas tales como las establecidas en los literales c) y d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9.º de la Ley 797 de 2003, y de principios de la seguridad social como los de universalidad, integralidad, unidad y eficiencia, todas las hipótesis de omisión en la afiliación, sea cual sea la razón a la que obedezcan, deben encontrar una solución común, que consiste en que las entidades de seguridad social tengan en cuenta el tiempo servido, como tiempo efectivamente cotizado, con la obligación correlativa del empleador de pagar el título pensional que corresponda, por los tiempos omitidos, tal y como lo dedujo el Tribunal”. (CSJ SL068-2018)”

Conforme con lo anterior, es a través del pago del cálculo actuarial correspondiente que se satisface la obligación derivada de la falta de afiliación del trabajador; frente al pago de los períodos en mora, este se da en aquellos eventos en que el empleador no pagó de manera oportuna los aportes a pensión, contando la entidad con la facultad legal de reclamarle al empleador tales pagos.

Así las cosas, no le asistía obligación al ISS, hoy Colpensiones, a ejercer las acciones de cobro de que trata el artículo 24 de la ley 100 de 1993 frente a un supuesto empleador, toda vez que no existió afiliación.

Además de lo dicho, tampoco se encuentra acreditada la relación laboral entre el demandante y el señor Montoya Montoya, conforme pasa a explicarse.

El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual señala que “... *toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo*”, sin embargo, no se puede pasar por alto, que la presunción anterior es de carácter legal y se interpreta de la siguiente manera: cuando la demandante aduce que estuvo vinculada por un contrato de trabajo, le compete demostrar la prestación personal del servicio y el salario percibido, y de inmediato se presume la subordinación jurídica.

Atendiendo a los principios que conforman la carga de la prueba, según lo señalado en el artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; asimismo, de conformidad con lo señalado en el artículo 164 de la misma codificación, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

Doctrinariamente se ha definido la carga de la prueba como el interés jurídico que le asiste a cada parte en que el hecho que fundamenta su pretensión o excepción resulte probado dentro del proceso. La carga de la prueba indica a quién corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho si pretende obtener una decisión favorable basada en él.

De tal manera que, conforme al principio de las cargas probatorias, cada parte deberá allegar al proceso los elementos pertinentes que permitan al operario judicial formarse la convicción necesaria para demostrar que en el evento debatido se cumple con los presupuestos fácticos que harían prosperar su pretensión o excepción según el caso.

Asimismo, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el operador judicial tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables. (Ver sentencias CSJ SL2049-2018, SL1469-2021 y SL2262-2022)

De acuerdo a lo esbozado, estaba en cabeza del demandante probar que laboró al servicio del señor Montoya Montoya, hecho que no ocurrió, pues no

hubo prueba testimonial o documental que llevarán al operador judicial al convencimiento de la existencia del contrato de trabajo.

La única prueba que reposa en el expediente son tres declaraciones extrajuicio realizadas por los señores Orlando de Jesús Ossa Chavarriaga, Iván José Bustamante Sierra y Enelson González, quienes de forma idéntica informan que el demandante laboró para el señor Guillermo León Montoya Montoya desde el mes de febrero de 1985 hasta agosto de 1994, de quien recibía órdenes, cumplía horario de trabajo, le pagaba su salario quincenalmente, le pagaba alimentación independientemente por ser un trabajador de confianza y que parece que no lo vinculó a la seguridad social a pesar de que le fue solicitado en varias ocasiones.

Para analizar las declaraciones extrajuicio antes mencionadas, resulta necesario traer a colación lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia del 5 de mayo de 1999, citada en reciente sentencia SC795 del 15 de marzo de 2021 radicación 68679-31-84-002-2013-00027-01, donde se han trazado algunas pautas para orientar el análisis crítico de la prueba testimonial de la siguiente forma:

“Entre los diversos aspectos a cuyo análisis debe dedicarse el juez para ponderar la eficacia probatoria del testimonio se encuentran algunos de naturaleza subjetiva, que le permitan establecer la idoneidad del testigo para rendir declaración judicial, aptitud que debe enjuiciarse, entonces, desde dos ópticas claramente definidas por el legislador: de un lado, la habilidad fisiológica del declarante para percibir los hechos sin equivocarse, requerimiento este que habrá de conducirlo a rechazar ab-initio el testimonio de las personas previstas en los artículos 215 y 216 del Código de Procedimiento Civil, amen que lo impulsara a cerciorarse de las condiciones sensoriales de los deponentes; y, de otro lado, a determinar su idoneidad moral, particularidad que debe apremiarlo a examinar con mayor celo el dicho de quienes se encuentren en cualquier situación que los tome proclives a engañar, mentir, circunstancias estas que, valga la pena anotarlo, puede ser, según lo prevé el artículo 217 ejusdem, de muy variada índole.

(...)

De igual modo, cuando algunas expresiones y precisiones se repiten mecánicamente en varios testimonios, podrá colegir el juzgador cierto afán de los deponentes por narrar un libreto preestablecido, ocurrencia que les podría restar crédito habida cuenta que esa “identidad de inspiración” o concordancia entre los testigos es, en verdad, inusitada. También estará atento a las vacilaciones o turbaciones del declarante, pues ellas suelen obedecer al temor a ser descubierto, a no contradecirse, nada de lo cual suele acontecer cuando se dice con la verdad. (...) (SC012-1999, del 05 de mayo de 1999, rad Nro 4978)”. (Resalto de la Sala)

Sentencia que es aplicable al caso que nos ocupa, toda vez que tanto el demandante, como las declaraciones extrajuicio aportadas son reiterativas en asegurar la existencia de la relación laboral, sin que dichas declaraciones tengan un sustento de la ciencia del dicho (por qué lo sabían, cuáles fueron

las circunstancias de tiempo, modo y lugar), lo que da lugar a que se trate de un libreto preestablecido.

En relación con la prueba testimonial que no fue decretada en primera instancia, solicita la parte actora que esta se decrete de oficio.

Esta Sala considera que tal solicitud debe ser rechazada, debido a que, como se ha venido advirtiendo, la parte actora contaba con la carga de probar la existencia de la relación laboral allegando al proceso los elementos pertinentes que permitan al operario judicial formarse la convicción necesaria para demostrar que en el evento debatido se cumple con los presupuestos fácticos que harían prosperar su pretensión, lo cual no hizo. También vale la pena precisar que contra de la decisión del juzgado del conocimiento de no decretar la prueba testimonial, el mandatario judicial del demandante se limitó a interponer recurso de reposición y no el de apelación.

Visto lo anterior, no puede pretenderse que la apelación de la sentencia sea la vía procesal para corregir los errores en que pudieron incurrir las partes en el trámite del proceso, la cual, para el caso concreto es, ante la inconformidad contra la decisión de no decretar una prueba, no se interpusieron los recursos ordinarios, esto es, el de apelación.

Asimismo, resulta improcedente el decreto de la prueba de forma oficiosa, ya que, conforme a lo regulado en el artículo 83 del Código Procesal del trabajo y Seguridad Social “*Las partes no podrán solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia*”.

Corolario de todo lo dicho, no obra prueba en el expediente que permita a esta Sala formar su convencimiento de que el demandante, señor Oscar de la Cruz Correa Flórez, laboró al servicio del señor Guillermo León Montoya Montoya desde febrero de 1985 hasta agosto de 1994, por lo que la sentencia absolutoria en tal sentido merece ser **CONFIRMADA**.

ii) Pensión de vejez

En dos ocasiones diferentes el demandante promovió demanda judicial en contra de Colpensiones, solicitando en reconocimiento de su pensión. La primera de ellas, con radicado 019-2015-00574, se solicitó la pensión familiar; en la segunda, con radicado 014-2017-00523, se pretendió la pensión de vejez con sumatoria de tiempos públicos y privados. Ambos procesos fueron absolutorios.

Con este tercer proceso, el demandante aspiraba a que, con los períodos supuestamente laborados en favor del señor Montoya Montoya acredite las semanas necesarias para causar la pensión bajo el régimen de transición, aplicando para ellos las disposiciones del decreto 758 de 1990.

Atendiendo a que no prosperaron las pretensiones relacionadas con la relación laboral, no se encuentran semanas adicionales a las ya estudiadas en los dos procesos judiciales mencionados, lo que conlleva a que el demandante no causó el derecho a la pensión de vejez, debiéndose como consecuencia, **CONFIRMAR** la sentencia absolutoria.

iii) Multa y costas procesales

En relación con la multa que le fuere impuesta al mandatario judicial del demandante, se advierte que tal decisión no es susceptible del recurso de apelación.

Frente a la condena en costas procesales, la inconformidad del recurrente estuvo dirigida únicamente en el valor impuesto sobre estas.

En lo que tiene que ver con la condena impuesta por costas procesales, nuestra ley procesal ha consagrado en esta materia el criterio objetivo, es decir, que las costas corren en todo caso a cargo del vencido en juicio, sin que sea admisible tener en consideración la conducta asumida por las partes dentro del mismo, es decir, sin considerar si se actuó o no de buena fe, ya que sólo basta con el hecho de haber resultado vencido en juicio para que se imponga tal condena.

Asimismo, cabe advertir que la sentencia de segunda instancia no es la oportunidad correcta para pronunciarse sobre la liquidación de las agencias en derecho, toda vez que el artículo 366 del Código General del Proceso, reguló que en materia de costas y agencias en derecho, la liquidación se hará de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, manifestando el mencionado artículo en su numeral 5°, que sólo podrá controvertirse el monto de las agencias en derecho mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. Por tal razón se **CONFIRMARÁ** lo manifestado por la juez en este sentido

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir adelante la apelación formulada por el demandante, son de su cargo y en favor de los demandados. De conformidad con lo señalado en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija \$1.000.000, los cuales serán pagados en suma de \$500.000 a cada uno.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** la sentencia absolutoria que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia mencionada.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Oscar de la Cruz Correa Flórez
DEMANDADOS	Colpensiones Guillermo León Montoya Montoya
RADICADO	05-001-31-05-006-2019-00048
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 19 de agosto de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 19 de agosto de 2022 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO